

IV. EL GOBIERNO DE PERÓN, 1943-1955

El gobierno militar que asumió el 4 de junio de 1943 fue encabezado sucesivamente por los generales Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro J. Farrell. El coronel Juan Domingo Perón, uno de sus miembros más destacados, logró concitar un vasto movimiento político en torno de su persona, que le permitió ganar las elecciones de febrero de 1946, poco después de que su apoyo popular se manifestara en una jornada por demás significativa, el 17 de octubre de 1945. Perón completó su período de seis años y fue reelecto en 1951, para ser derrocado por un golpe militar en septiembre de 1955. En estos doce años en que fue la figura central de la política, al punto de dar su nombre al movimiento que lo apoyaba, Perón y el peronismo imprimieron a la vida del país un giro sustancial y perdurable.

La emergencia

La revolución del 4 de junio fue inicialmente encabezada por el general Rawson, quien renunció antes de prestar juramento, y fue reemplazado por el general Pedro Pablo Ramírez, ministro del último gobierno constitucional. El episodio es expresivo de la pluralidad de tendencias existentes en el grupo revolucionario y de su indefinición acerca del rumbo a seguir, más allá de coincidir en la convicción de que el orden constitucional estaba agotado y que la proclamada candidatura de Patrón Costas no llenaría el vacío de poder existente. El nuevo gobierno suscitó variadas expectativas fuera de las Fuerzas Armadas, pues muchos concordaban con el diagnóstico, y además esperaban algo del golpe, incluso los radicales; sin embargo, se constituyó casi exclusivamente con militares, y el centro de las discusiones y las decisiones estuvo en el Ministerio de Guerra, controlado por un grupo de oficiales organizado en una logia, el GOU (Grupo de Oficiales Unidos), en torno del ministro de Guerra Farrell.

Los militares en el gobierno coincidían en la necesidad de acallar la agitación política y la protesta social: proscribieron a los comunistas, persiguieron a los sindicatos e intervinieron la CGT —por entonces dividida—, disolvieron Acción Argentina, que nucleaba a los partidarios de romper relaciones con el Eje, y más tarde hicieron lo mismo con los partidos políticos, intervinieron las universidades dejando cesantes a un vasto grupo de profesores de militancia opositora, y finalmente establecieron la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Contaron con la colaboración de un elenco de nacionalistas y católicos integristas, algunos de antigua militancia junto a Uriburu, quienes dieron el tono al régimen militar: autoritario, antiliberal y mesiánico, obsesionado por la fundación de un orden social nuevo y por evitar el caos del comunismo que, según pensaban, sería la secuela inevitable de la posguerra. No le fue difícil a la oposición democrática identificar al gobierno militar con el nazismo.

Sin embargo en el gobierno había, junto con algunos que simpatizaban con Alemania, otros proaliados y muchos partidarios de mantener la neutralidad que había practicado el gobierno de Castillo, benevolente con Gran Bretaña. Por otra parte, en 1943 la guerra estaba evolucionando de un modo tal que un alineamiento con el Eje era impensable. De hecho, el acuerdo comercial con Gran Bretaña se mantuvo. Estados Unidos, en cambio, atacó con fuerza creciente a uno de los dos únicos gobiernos americanos renuentes a acompañarlo en la guerra con el Eje, y además sospechoso de apañar a los nazis. El Departamento de Estado emprendió una cruzada contra los militares, desinteresándose de las repercusiones internas de su acción e ignorando los gestos de acercamiento del gobierno argentino. Esto permitió a los más acérrimos partidarios de la neutralidad ganar posiciones, de modo que el conflicto se desarrolló en una escalada creciente: para Estados Unidos —como ha subrayado C. Escudé— era una cuestión de prestigio y un imperativo moral acabar con los militares, y para éstos una cuestión de principio no aceptar el *diktat* del Departamento de Estado. A principios de 1944, luego de que Ramírez decidiera romper relaciones con el Eje, fue desplazado por los oficiales más decididamente antinorteamericanos. Aislado en lo interno y también externamente, el gobierno se encontró metido en un callejón sin salida. Ésta fue finalmente proporcionada por uno de los oficiales que por entonces había ascendido en forma notable dentro del gobierno: el coronel Juan Domingo Perón, uno de los miembros más influyentes del GOU, secretario del ministro de Guerra Farrell y luego ministro, cuando Farrell reemplazó a Ramírez en la Presidencia en febrero de 1944. Poco después, en julio, y luego de desplazar a varios posibles competidores, Perón llegó a ser vicepresidente y el alma verdadera del gobierno.

Perón sobresalía de entre sus colegas por su capacidad profesional y por la amplitud de sus miras políticas. Una estadía en Europa en los años anteriores a la guerra le había hecho admirar los logros del régimen fascista italiano, así como comprobar los terribles resultados de la Guerra Civil en España. Clarividencia y preocupación lo llevaron a ocuparse de un actor social poco tenido en cuenta hasta entonces: el movimiento obrero. A cargo de la Dirección Nacional del Trabajo —que poco después convirtió en Secretaría— se dedicó a vincularse con los dirigentes sindicales. Todos fueron convocados, con excepción de los dirigentes comunistas que, luego de un frustrado acercamiento inicial, resultaron sistemáticamente perseguidos y erradicados de sus posiciones. Al resto se los impulsó a organizarse y a presentar sus demandas, que empezaron a ser satisfechas: además de dirimir conflictos específicos, por la vía de contratos colectivos, que supervisaba la Secretaría, se extendió el régimen de jubilaciones, de vacaciones pagas, de accidentes de trabajo, se ajustaron las categorías ocupacionales y en general se equilibraron las relaciones entre obreros y patrones, incluso en la actividad misma de las plantas. En muchos casos se trataba simplemente de aplicar disposiciones legales ignoradas. La sanción del Estatuto del Peón innovó sustancialmente, pues extendió estos criterios al mundo rural, introduciendo un elemento público en relaciones manejadas hasta entonces en forma paternal y privada.

Desde la Secretaría de Trabajo, Perón expandía los mecanismos del Estado árbitro, esbozados durante el gobierno de Yrigoyen y apenas utilizados durante la década del treinta, con la excepción de Fresco en la provincia de Buenos Aires, y a la vez estimulaba la organización de los trabajadores, incentivaba sus reclamos, y presionaba para que éstos fueran satisfechos. La reacción de los dirigentes sindicales fue inicialmente de duda y desconcierto. Desde principios de siglo habían ido reconociendo el papel central del Estado en las relaciones con los patrones y se habituaron a negociar con él. Pero más recientemente, y ante gobiernos escasamente interesados en desempeñar ese papel mediador, habían hecho un acuerdo con los partidos políticos opositores, en el que los reclamos sindicales se fundían con la demanda democrática, según las líneas de los frentes populares. La tendencia original sindicalista sin embargo no había desaparecido: en 1942 la CGT se dividió entre un sector más afín a los partidos opositores, encabezado por los comunistas y muchos de los dirigentes socialistas, y otro más identificado con la vieja línea sindicalista, donde se alineaban los gremios ferroviarios. La propuesta de Perón agudizó una discusión ya existente entre los dirigentes sindicales: el Frente Popular perdía atractivo, pero a la vez la polarización de la guerra lo revitalizaba; las mejoras ofrecidas eran demasiado importantes como para rechazarlas o enfrentar al gobierno, so pena de perder el apoyo de los trabajadores. Los sindicalistas adoptaron lo que Juan Carlos Torre llamó una estrategia oportunista: aceptaron el envite del gobierno sin cerrar las puertas a la "oposición democrática".

Tampoco las cerraba el propio Perón, dispuesto a hablar con todos los sectores de la sociedad y la política, desde los radicales hasta los dirigentes de las sociedades de fomento, y capaz de sintonizar con cada uno el discurso adecuado, aunque dentro de una constante apelación a "todos los argentinos". A sus colegas militares les señalaba los peligros que entrañaba la posguerra, la amenaza de desórdenes sociales y la necesidad de un Estado fuerte que interviniera en la sociedad y en la economía, y que a la vez asegurara la autarquía económica. En el Consejo Nacional de Posguerra que constituyó, insistió en la importancia de profundizar las políticas de seguridad social, así como de asegurar la plena ocupación y la protección del trabajo, ante la eventual crisis que pudieran sufrir las industrias crecidas con la guerra. A los empresarios les señaló la amenaza que entrañaban las masas obreras desorganizadas y el peligro del comunismo, que se veía avanzar en Europa. Ante unos y otros se presentaba como quien podía canalizar esa efervescencia, si lograba para ello el poder necesario. Pero los empresarios fueron desconfiando cada vez más del "bombero piromaníaco" —según la feliz imagen de A. Rouquié— que agregaba combustible a la caldera, hasta el límite de su estallido, y al mismo tiempo controlaba la válvula de escape. Progresivamente, las agrupaciones patronales fueron tomando distancia de Perón y de la política de la Secretaría, mientras éste paralelamente acentuaba su identificación con los obreros, subrayaba su prédica anticapitalista y desarrollaba ampliamente en su discurso los motivos de la justicia social. A la vez, se fueron reduciendo las reticencias de los

dirigentes sindicales, quienes encontraban en los partidos democráticos un eco y un interés mucho menor que el demostrado por el coronel Perón.

La oposición democrática, que para definir su propia identidad había encontrado en el gobierno militar un enemigo mucho más adecuado que el viejo régimen oligárquico, empezó a reconstituirse a medida que el avizorado fin de la guerra hacía más difícil la intransigencia del gobierno. La liberación de París, en agosto de 1944, dio pie a una notable manifestación claramente antigubernamental y desde entonces un vigoroso movimiento social ganó la calle y revitalizó los partidos políticos. El gobierno mismo estaba en retirada: en marzo de 1945, y ante la inminencia del fin del conflicto, aceptó el reclamo de Estados Unidos —donde una nueva conducción en el Departamento de Estado prometía una relación más fácil— y declaró la guerra al Eje, condición para ser admitidos en las Naciones Unidas, que empezaban a constituirse. Al mismo tiempo, y por iguales razones, liberalizó su política interna. Los partidos opositores reclamaron la retirada lisa y llana de los gobernantes y la entrega del poder a la Corte Suprema, último vestigio de la legalidad republicana, y sellaron su acuerdo para las elecciones que veían próximas: la Unión Democrática expresaría el repudio de la civilidad a los militares y la total adhesión a los principios de los vencedores en la guerra. El frente político, que incluía a comunistas, socialistas y demoprogresistas, y contaba con el apoyo implícito de los grupos conservadores, estaba animado por los radicales, aunque un importante sector del partido, encabezado por el cordobés Amadeo Sabattini, rechazó la estrategia "unionista" y reclamó una postura intransigente y "nacional", que apostaba a algunos interlocutores en el Ejército, adversos a Perón. Esa posición no prosperó, y la Unión Democrática fue definiendo su frente y sus alianzas: en junio de 1945 un Manifiesto de la Industria y el Comercio repudiaba la legislación social del gobierno, En septiembre de 1945, una multitudinaria Marcha por la Libertad y la Constitución terminó de sellar la alianza política, pero también social, que excluía a la mayoría de los sectores obreros, otrora animadores del Frente Popular.

El Ejército, presionado por la opinión pública y ganado por la desconfianza al coronel sindicalista, forzó su renuncia el 8 de octubre, pero no encontró una alternativa: el general Ámalos, nuevo ministro de Guerra, y la oposición democrática especularon con varias opciones pero no pudieron definir ningún acuerdo. En medio de esas vacilaciones un hecho novedoso volvió a cambiar el equilibrio: una multitud se concentró el 17 de octubre en la Plaza de Mayo reclamando por la libertad de Perón y su restitución a los cargos que tenía. Los partidarios de Perón en el Ejército volvieron a imponerse, el coronel habló a la multitud en la Plaza y volvió al centro del poder, ahora como candidato oficial a la presidencia.

Lo decisivo de la jornada de octubre no residió tanto en el número de los congregados —quizás inferior a los de la Marcha de la Libertad de septiembre— cuanto por su composición, definitivamente obrera. Su

emergencia coronaba un proceso hasta entonces callado de crecimiento, organización y politización de la clase obrera. La industrialización había avanzado sustantivamente durante la guerra, tanto para exportar a los países vecinos cuanto para sustituir las importaciones, escasas por las dificultades del comercio y también por el boicot norteamericano. Lo cierto es que la ocupación industrial había crecido, y que la masa de trabajadores industriales había empezado a engrosar con migrantes rurales, expulsados por la crisis agrícola. No fue un crecimiento visible, pues a menudo se desarrolló en la periferia de las grandes ciudades como Rosario, La Plata o Buenos Aires, pero sobre todo porque no se trataba de un actor social cuya presencia fuera esperada, ni siquiera para un observador tan sagaz como Ezequiel Martínez Estrada, que lo ignoró en su versión de 1940 de *La cabeza de Goliat*. Pero allí estaban, cada vez más compactos en torno de unos sindicatos de fuerza acrecida, cada vez más entusiasmados con la política de Perón, y finalmente cada vez más inquietos por su renuncia. En el marco de sus organizaciones, y encabezados por sus dirigentes, quienes todavía no habían despejado todas sus dudas respecto del coronel, marcharon el 17 a la Plaza de Mayo, el centro simbólico del poder, materializando un reclamo que en primer lugar era político pero que tenía profundas consecuencias sociales. Decidieron la crisis en favor de Perón, inauguraron una nueva forma de participación, a través de la movilización, definieron una identidad y ganaron su ciudadanía política, sellando al mismo tiempo con Perón un acuerdo que ya no se rompería. Probablemente algunos de esos significados no fueron evidentes desde un principio —muchos creyeron ver en ellos a los sectores marginales de los trabajadores, la "chusma ignorante" o el "lumpenproletariado"— pero paulatinamente se fueron revelando, al tiempo que una imagen mítica y fundacional iba recubriendo y ocultando la jornada de octubre real.

Con las elecciones a la vista, Perón y quienes lo apoyaban se dedicaron a organizar su fuerza electoral. Los dirigentes sindicales, fortalecidos por la movilización de octubre, decidieron crear un partido político propio, el Laborista, inspirado en el que acababa de triunfar en Inglaterra. Su organización aseguraba el predominio de los dirigentes sindicales, y su programa recogía diversos motivos, desde los más estrictamente socialistas hasta los vinculados con el dirigismo económico y el estado de bienestar. En el nuevo partido, Perón era, nada más o nada menos, el primer afiliado y el candidato presidencial, una posición todavía distante de la jefatura plena que asumiría luego. Quizá para buscar bases de sustentación alternativas, o para recoger apoyos más amplios fuera del mundo del trabajo, Perón promovió una escisión en el radicalismo, la UCR-Junta Renovadora, a la que se integraron unos pocos dirigentes de prestigio, de entre quienes eligió a Jazmín Hortensio Quijano —un anciano y pintoresco dirigente correntino— para acompañarlo en la fórmula. Las relaciones entre laboristas y radicales renovadores fueron malas: aquéllos pretendían que el coronel Domingo Mercante, que había secundado a Perón en la Secretaría de Trabajo, lo acompañara en la fórmula, pero debieron conformarse con colocarlo como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Apoyaron también a Perón muchos dirigentes conservadores

de segunda línea, y sobre todo lo respaldaron el Ejército y la Iglesia, que en una pastoral recomendó, con pocos eufemismos, votar por el candidato del gobierno que había perseguido al comunismo y establecido la enseñanza religiosa.

La Unión Democrática incluyó a los partidos de izquierda pero —por la impugnación de los radicales intransigentes— excluyó a los conservadores, que debieron resignarse a apoyarla desde fuera o pasarse calladamente al bando de Perón, como hicieron muchos, movidos por la vieja rivalidad con el radicalismo. Sus candidatos —José P. Tamborini y Enrique Mosca— provenían del riñón de la conducción alvearista del radicalismo. Su programa era socialmente progresista —tanto quizá como el de Perón—, pero su impacto quedó diluido por el entusiasta apoyo recibido de las organizaciones patronales. Sin embargo, para sus dirigentes y para las masas que esta coalición movilizaba, lo esencial pasaba por la defensa de la democracia y la derrota del totalitarismo, que había sucedido y en cierto modo prolongado al gobierno fraudulento. Así se había pensado la política en los últimos diez años, con la segura convicción de que, en elecciones libres, los adalides de la democracia ganarían.

Pero el país había cambiado, en forma lenta y gradual quizás, aunque el descubrimiento de esas transformaciones fue brusco y espectacular. Perón asumió plenamente el discurso de la justicia social, de la reforma justa y posible, a la que sólo se oponía el egoísmo de unos pocos privilegiados. Estas actitudes sociales, arraigadas en prácticas igualmente consistentes, se venían elaborando en los diez o veinte años anteriores, lo que explica el eco suscitado por las palabras de Perón, que contrapuso la democracia formal de sus adversarios a la democracia real de la justicia social, y dividió la Sociedad entre el "pueblo" y la "oligarquía". Un segundo componente de estos cambios, las actitudes nacionalistas, emergió bruscamente como respuesta a la intempestiva intervención en la elección del embajador norteamericano Spruille Braden, quien reanudando el virulento ataque del Departamento de Estado contra Perón, acusado de ser un agente del nazismo, respaldó públicamente a la Unión Democrática. La respuesta fue contundente: "Braden o Perón" agregó una segunda y decisiva antinomia y terminó de configurar el bloque del nacionalismo popular, capaz de enfrentar a lo que quedaba del Frente Popular.

El 24 de febrero triunfó Perón por alrededor de 300 000 votos de ventaja, equivalentes a menos del 10% del electorado. Fue un triunfo claro pero no abrumador. En las grandes ciudades, fue evidente el enfrentamiento entre los grandes agrupamientos de trabajadores y los de clases medias y altas, pero en el resto del país las divisiones tuvieron un significado más tradicional, vinculado al peso de ciertos caudillos, al apoyo de la Iglesia o a la decisión de sectores conservadores de respaldar a Perón. Perón había ganado pero el peronismo estaba todavía por construirse.

Mercado interno y pleno empleo

El nuevo gobierno mantuvo la retórica antinorteamericana, que elaboró luego en la doctrina de la "tercera posición", distanciada tanto del comunismo como del capitalismo, pero estableció relaciones diplomáticas con la URSS, e hizo lo posible para mejorar sus relaciones con Washington. Por presión de Perón, y venciendo las reticencias de muchos antiguos nacionalistas que lo habían acompañado, el Congreso aprobó en 1946 las Actas de Chapultepec, que permitían el reingreso a la comunidad internacional, y al año siguiente el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, firmado en Río. En el mismo lugar donde, cinco años antes, el país manifestara plenamente su independencia diplomática, el canciller Juan Atilio Bramuglia se limitó en la ocasión a plantear diferencias menores. Pero la hostilidad norteamericana, alimentada por viejas razones económicas —la competencia de los granjeros— y motivos políticos más recientes, no disminuyó, y Estados Unidos siguió dispuesto a hacer pagar a la Argentina por su independencia durante la guerra. El boicot fue sistemático. El bloqueo a armamentos e insumos vitales no pudo mantenerse en la posguerra, salvo en algunos casos, pero el comercio exterior era vulnerable. Las exportaciones industriales a los países limítrofes, que habían crecido mucho durante la guerra, empezaron a retroceder ante la competencia norteamericana. Las exportaciones agrícolas a Europa —que entraba a la paz literalmente hambrienta— fueron obstaculizadas por Estados Unidos, restringiendo los transportes o vendiendo a precios subsidiados. La apetencia de los países maltrechos por la guerra era demasiado grande para que esto impidiera las ventas, pero en ninguno de ellos poseía ni productos para intercambiar ni divisas convertibles que el país pudiera usar para saldar sus compras en Estados Unidos, de modo que en estos años excepcionales la Argentina cosechó beneficios modestos. En 1948 se lanzó el Plan Marshall, pero Estados Unidos prohibió que los dólares aportados a Europa se usaran para importaciones de la Argentina. Ya desde 1949 las economías europeas se recuperaron, Estados Unidos inundó el mercado con cereales subsidiados y la participación argentina disminuyó drásticamente. Para el gobierno quedaba la esperanza de que una nueva guerra mundial restableciera la situación excepcional de principios de los años cuarenta, y en verdad no faltaban indicios en ese sentido, como la crisis de Berlín o la guerra de Corea, que estalló en 1950. El acotamiento del conflicto, y la rápida respuesta norteamericana para impedir una alteración del mercado mundial, acabaron con la última esperanza.

Gran Bretaña no aceptó las presiones norteamericanas para restringir sus compras en la Argentina. Además de la carne, estaban en juego las libras argentinas bloqueadas en Londres durante la guerra y las inversiones británicas radicadas en el país. La magnitud de las deudas británicas —la Argentina era sólo un acreedor menor— hacía impensable el pago de las libras. La pésima situación de las empresas ferroviarias, la descapitalización y obsolescencia, y la pérdida general de rentabilidad hacían conveniente para los británicos

desprenderse de ellas. Luego de una larga y compleja negociación, se arregló la compra de los ferrocarriles por un valor similar a las libras bloqueadas, y un acuerdo sobre venta de carne, que sería en lo sucesivo pagada en libras convertibles. Tras la retórica nacionalista que envolvió esta operación —presentada como parte del programa de independencia económica y celebrada con una gran manifestación en la Plaza de Mayo— se trataba sin duda de un éxito británico, frente a un país que no tenía mejor opción. La crisis financiera británica de 1947 y el abandono de la convertibilidad de la libra acabó con la única ventaja importante obtenida.

Vender cereales fue cada vez más difícil, y vender carne, cada vez menos interesante. La consecuencia fue una reducción de la producción agropecuaria —motivada también por otros aspectos de la política económica— que se acompañó de un crecimiento sustantivo de la parte destinada al consumo interno. El lugar en el mundo que tradicionalmente tenía la Argentina, como productor privilegiado de bienes agropecuarios, fue haciéndose menos significativo y esto contribuyó a definir las opciones —económicas y políticas— que la guerra había planteado.

La guerra mundial, la crisis de los mercados y el aislamiento, acentuado por el boicot norteamericano, habían contribuido a profundizar el proceso de sustitución de importaciones iniciado en la década anterior, que extendiéndose más allá de los límites considerados "naturales" —la elaboración de materias primas locales—, avanzó en el sector metalúrgico y otros. Una empresa típica, Siam Di Tella, que había comenzado elaborando máquinas de amasar y surtidores para YPF, creció notablemente con las heladeras, a las que después sumó ventiladores, planchas y lavarropas. En algunos casos se exportó a países vecinos, que también padecían la falta de los suministros habituales; en otros, se fabricaron localmente los productos importados ausentes: se adaptaron los modelos y los procedimientos, con ingenio y quizá de manera improvisada y poco eficiente, y se usó intensivamente la mano de obra, lo que sumado a las dificultades para incorporar maquinarias hizo que los aumentos de producción implicaran caídas en la productividad laboral. Creció así, junto a las empresas industriales tradicionales, una amplia capa de establecimientos medianos y pequeños, y aumentó en forma notable la mano de obra industrial, que se nutría de la corriente de migrantes internos, cada vez más intensa.

El fin de la guerra y la conclusión de esa suerte de "vacío de poder" en el mundo, que había permitido el crecimiento de sectores industriales marginales como el argentino, planteaba distintas opciones. Abandonada definitivamente la idea de una vuelta a la "normalidad" previa a 1930 o a 1914, quienes estaban vinculados con los grupos empresarios más tradicionales, ubicados tanto en el sector exportador como en el industrial, adoptaban las ideas planteadas por Pinedo en 1940: estimular las industrias "naturales", capaces de producir eficientemente y de competir en los mercados externos, asociarse con Estados Unidos para sustentar su crecimiento, y a la vez mantener un

equilibrio entre el sector industrial y el agropecuario, del cual debían seguir saliendo las divisas necesarias para la industria. La opción era difícil, no sólo por la necesidad de recomponer una relación con Estados Unidos que estaba muy deteriorada, así como de procurar firmemente recuperar los mercados de los productos agropecuarios, sino porque suponía una fuerte depuración del sector industrial, eliminar el segmento menos eficiente crecido durante la guerra al amparo de la protección natural que ésta generaba, y afrontar a la vez los costos de una difícil absorción de la mano de obra que quedaría desocupada. Una segunda alternativa había sido planteada por grupos de militares durante la guerra, y recogía tanto motivos estratégicos de las Fuerzas Armadas como ideas que arraigaban en el nacionalismo: profundizar la sustitución, extenderla a la producción de insumos básicos, como el acero o el petróleo, mediante una decidida intervención del Estado, y asegurar así la autarquía. La imagen de la Unión Soviética —que más allá del comunismo, se había convertido en un Estado poderoso— está presente en esta propuesta, y en la subsecuente retórica de los planes quinquenales. Pero, igual que en la Unión Soviética, esto implicaba un enorme esfuerzo para la capitalización, restricciones al consumo y probablemente una "generación sacrificada".

Perón venía participando de estas discusiones, que él mismo promovió en el Consejo de Posguerra constituido en 1944. Su solución fue ecléctica y también novedosa, y tuvo en cuenta principalmente los intereses inmediatos de los trabajadores, que constituían su apoyo más sólido. La inspiración autárquica de los militares se dibuja en el Primer Plan Quinquenal, que debía servir para planificar la economía pero se limitó a una serie de vagos enunciados, y también en la constitución de la empresa siderúrgica estatal SOMISA, que sin embargo todavía seguiría casi en proyecto diez años después. La presencia del sector industrial crecido en la guerra se advierte en su primer equipo económico, a cuya cabeza estaba Miguel Miranda, un fabricante de envases de hojalata, secundado por Raúl Lagomarsino, un industrial del vestido, y asesorado por José Figuerola, un destacado técnico español. Miranda, nombrado presidente del Banco Central, del poderoso Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) y del Consejo Económico Social, fue durante tres años el conductor de la economía. La política del Estado —dotado como se verá de instrumentos mucho más poderosos— apuntó a la defensa del sector industrial instalado, y a su expansión dentro de las pautas vigentes de protección y facilidad. Éste recibió amplios créditos del Banco Industrial; protección aduanera para eliminar competidores externos y divisas adquiridas a tipos preferenciales para equiparse. Además, las políticas de redistribución de ingresos hacia los sectores trabajadores contribuían a la expansión sostenida del consumo. En ese singular período, la alta ocupación y los salarios en alza trajeron aparejada una expansión de la demanda y una inflación cuyos niveles empezaron a elevarse, pero a la vez ganancias importantes para los empresarios.

En suma, Perón había optado por el mercado interno' y por la defensa del pleno empleo. Se trataba de una verdadera "cadena de la felicidad", que

pudo financiarse principalmente por la existencia de una abundante reserva de divisas, acumulada durante los prósperos años de la guerra, y que permitió en la posguerra un acelerado, desenfrenado y con frecuencia poco eficiente equipamiento industrial. Desafiando las leyes de la contabilidad, y con la esperanza puesta en una nueva guerra mundial, en esos años se gastó en el exterior mucho más de lo que entraba. Por otra parte, el IAPI monopolizó el comercio exterior y transfirió al sector industrial y urbano ingresos provenientes del campo, mediante la diferencia entre los precios pagados a los productores y los obtenidos por la venta de las cosechas en el exterior. Era un golpe fuerte al sector agropecuario, al que sin duda ya no se consideraba la "rueda maestra" de la economía, o al que quizá se suponía capaz de soportarlo todo. Los productores rurales padecían también por la falta de insumos y maquinarias —para las que no había cambio preferencial—, el congelamiento de los arrendamientos, que afectó el ciclo natural de recuperación de la fertilidad de la tierra, y el costo más alto de la mano de obra, debido a la vigencia del Estatuto del peón. Todas estas razones agudizaron la caída de la superficie cultivada, al tiempo que el aumento del consumo interno —reflejado en el trigo, y sobre todo en la carne— reducía aún más las disponibilidades para la exportación.

La política peronista se caracterizó por un fuerte impulso a la participación del Estado en la dirección y regulación de la economía; desarrolló tendencias iniciadas en la década anterior, bajo las administraciones conservadoras, pero las extendió y profundizó, según una corriente de inspiración keynesiana difundida en muchas partes durante la posguerra. A la vez, hubo una generalizada nacionalización de las inversiones extranjeras, particularmente de empresas controladas por capital británico, que se hallaba en pleno proceso de repatriación; se adjudicó a esto una gran importancia simbólica, expresada en la fórmula de la Independencia Económica, solemnemente proclamada en Tucumán el 9 de julio de 1947. A los ferrocarriles se sumaron los teléfonos, la empresa de gas y algunas compañías de electricidad del interior, sin afectar sin embargo a la legendaria CADE que servía a la Capital. Se dio fuerte impulso a Gas del Estado, construyendo el gasoducto desde Comodoro Rivadavia, a la Flota Mercante —a la que se incorporaron las naves del extenso grupo Doderó— y a la incipiente Aerolíneas Argentinas. El Estado avanzó incluso en actividades industriales, no sólo por la vía de las fábricas militares sino con un grupo de empresas alemanas nacionalizadas, que integraron el grupo DIME. Pero la reforma más importante fue la nacionalización del Banco Central. Desde él se manejaba la política monetaria y la crediticia, y también el comercio exterior, pues los depósitos de todos los bancos fueron nacionalizados, y al Banco Central se le asignó el control del IAPI.

Así, la nacionalización de la economía y su control por el Estado fueron una de las claves de la nueva política económica. La otra —y quizá la primera— tuvo que ver con los trabajadores, con el mantenimiento del empleo y con la elevación de su nivel de vida. Esto tenía probablemente raíces políticas más

importantes que las económicas: el terror a las posibles consecuencias sociales del desempleo, el recuerdo de la crisis de la primera posguerra —de la que Perón mismo tuvo una experiencia directa, cuando participó en la represión de los amotinados de Vasena— así como la misma experiencia europea de entreguerra y también de posguerra, debe haber influido no sólo en el diseño político más general sino en el privilegio, en materia de política económica, de la salvaguardia del empleo industrial primero y de la redistribución de los ingresos después. Pero a la vez, la justicia social sirvió para el sostenimiento del mercado interno. Entre 1946 y 1949 se extendieron y generalizaron las medidas sociales lanzadas antes de 1945. Por la vía de las negociaciones colectivas, garantizadas por la ley, los salarios empezaron a subir notablemente. A ello se agregaron las vacaciones pagas, las licencias por enfermedad o los sistemas sociales de medicina y de turismo, actividades en las que los sindicatos tuvieron un importante papel. Por otros caminos, el Estado benefactor contribuyó decisivamente a la elevación del nivel de vida: congelamiento de los alquileres, establecimiento de salarios mínimos y de precios máximos, mejora de la salud pública —la acción del ministro Ramón Carrillo fue fundamental—, planes de vivienda, construcción de escuelas y colegios, organización del sistema jubilatorio, y en general todo lo relativo al campo de la seguridad social.

El Estado peronista

Esta combinación de lo conseguido y lo concedido es reveladora de la compleja relación establecida entre los trabajadores y el Estado. Los términos en que ésta se había desarrollado hasta las elecciones se modificaron radicalmente enseguida después del triunfo. Justificándose en la innumerable cantidad de conflictos entre laboristas y radicales renovadores, Perón ordenó la disolución de los distintos nucleamientos que lo habían apoyado, y entre ellos el Partido Laborista, a través del cual los viejos sindicalistas aspiraban a conducir una acción política autónoma, solidaria con Perón pero independiente. La decisión —que culminaría en la creación del Partido Peronista— fue al principio resistida, pero en definitiva sólo Cipriano Reyes, el dirigente de los frigoríficos de Berisso, se enfrentó con Perón, ganándose una enconada persecución. Poco después, en enero de 1947, Perón eliminó de la dirección de la CGT a Luis Gay, veterano gremialista e inspirador del Partido Laborista, y uno de los propulsores del proyecto autónomo, y lo reemplazó por un dirigente de menor cuantía, indicando así la voluntad de subordinar al Estado la cúpula del movimiento obrero. Nuevamente, no hubo resistencias: probablemente para el grueso de los trabajadores la solidaridad con quien había hecho realidad tantos beneficios importaba más que una autonomía política cuyos propósitos, en ese contexto, no resultaban claros.

Pero a la vez, la organización obrera se consolidó firmemente. Como ha mostrado Louise Doyon, la sindicalización, escasa hasta 1943, se extendió rápidamente a los gremios industriales primero y a los empleados del Estado después, alcanzando su máximo hacia 1950. La ley de Asociaciones Profesionales aseguraba la

existencia de grandes y poderosas organizaciones —un sindicato por rama de industria y una confederación única—, con fuerza para negociar de igual a igual con los representantes patronales, pero a la vez dependientes de la "personería gremial", otorgada por el Estado. Las orientaciones y demandas circulaban preferentemente desde arriba hacia abajo, y la CGT, conducida por personajes mediocres, fue la responsable de transmitir las directivas del Estado a los sindicatos y de controlar a los díscolos. Similar fue la función de los sindicatos respecto de las organizaciones de base: controlar, achicar el espacio de acción autónoma, intervenir a las secciones demasiado inquietas; a la vez, se hicieron cargo de funciones cada vez más complejas, tanto en la negociación de los convenios como en las actividades sociales, y debieron desarrollar una administración especializada, de modo que la fisonomía de los dirigentes sindicales, convertidos en una burocracia estable, se diferenció notablemente de la de los viejos luchadores. En la base, la acción sindical conservó una gran vitalidad, por obra de las comisiones internas de fábrica, que se ocuparon de infinidad de problemas inmediatos referidos a las condiciones de trabajo, negociaron directamente con patronos y gerentes, y establecieron en la fábrica un principio bastante real de igualdad. En los primeros años, hasta 1949, las huelgas fueron numerosas, y se generaron al impulso de las reformas lanzadas desde el gobierno, para hacerlas cumplir o extenderlas, con la convicción por parte de los trabajadores de que se ajustaban a la voluntad profunda de Perón.

Éste, sin embargo, se preocupaba por esa agitación sin fin y procuraba profundizar el control del movimiento sindical. Los gremialistas que lo acompañaron inicialmente fueron alejándose, reemplazados por otros elegidos por el gobierno y más proclives a acatar sus indicaciones. Las huelgas fueron consideradas inconvenientes al principio, y francamente negativas luego: se procuró solucionar los conflictos mediante los mecanismos del arbitraje, y en su defecto se optó por reprimirlos, ya sea por mano del propio sindicato o de la fuerza pública. Desde 1947 Eva Perón, esposa del presidente, se dedicó desde la Secretaría de Trabajo —el lugar dejado vacante por Perón— a cumplir las funciones de mediación entre los dirigentes sindicales y el gobierno, facilitando la negociación de los conflictos con un estilo muy personal que combinaba la persuasión y la imposición.

La relación entre Perón y el sindicalismo —crucial en el Estado peronista— fue sin duda compleja, negociada y difícilmente reducible a una fórmula simple. Pese a la fuerte presión del gobierno sobre los sindicatos y a la decisión de controlar su acción, éstos nunca dejaron de ser la expresión social y política de los trabajadores. Desde la perspectiva de éstos, el Estado no sólo facilitaba y estimulaba su organización y los colmaba de beneficios, sino que creaba una situación de comunicación y participación fluida y hasta familiar, de modo que estaban lejos de considerarlo como algo ajeno. El Estado peronista, a su vez, tenía en los trabajadores su gran fuerza legitimadora, y los reconocía como tal; y no de un modo retórico o abstracto, sino referido a sus organizaciones y a sus dirigentes, a quienes concedió un lugar destacado.

Pero a la vez, el Estado peronista procuró extender sus apoyos a la amplia

franja de sectores populares no sindicalizados, con quienes estableció una comunicación profunda, aunque de índole diferente, a través de Eva Perón y de la Fundación que llevó su nombre. Financiada con fondos públicos y aportes privados más o menos voluntarios, la Fundación realizó una obra de notable magnitud: creó escuelas, hogares para ancianos o huérfanos y policlínicos; repartió alimentos y regalos navideños; estimuló el turismo y los deportes, a través de campeonatos infantiles o juveniles de dimensión nacional, bautizados con los nombres de la pareja gobernante. Sobre todo, practicó la acción directa: las unidades básicas —organizaciones celulares del Partido— detectaban los casos particulares de desprotección y transmitían los pedidos a la Fundación donde, por otra parte, la propia Eva Perón recibía cotidianamente, sin fatiga, una permanente caravana de solicitantes que obtenían una máquina de coser, una cama en el hospital, una bicicleta, un empleo o una pensión quizá, un consuelo siempre. Eva Perón resultaba así la encarnación del Estado benefactor y providente, que a través de la "Dama de la Esperanza" adquiría una dimensión personal y sensible. Sus beneficiarios no eran exactamente lo mismo que los trabajadores: muchos carecían de la protección de sus sindicatos, y todo lo debían al Estado y a su intercesora. Los medios de difusión machacaron incesantemente sobre esta imagen, entre benefactora y reparadora, replicada luego por la escuela, donde los niños se introducían a la lectura con "Evita me ama". La experiencia de la acción social directa, sumada al reiterado discurso del Estado, terminaron constituyendo una nueva identidad social, los "humildes", que completó el arco popular de apoyo al gobierno.

Según una concepción que se desarrolló más ampliamente a medida que transcurrían los años, el Estado debía vincularse con cada uno de los sectores de la sociedad, que era considerada como una comunidad y no como la suma de individuos, y aspiraba a que cada uno de ellos se organizara y constituyera su representación corporativa. Con mayor o menor fortuna, aspiró a organizar a los empresarios, reuniendo en la Confederación General Económica a todas las representaciones sectoriales, así como a los estudiantes universitarios o a los profesionales. Intentó también, con cautela, redefinir las relaciones con las grandes corporaciones tradicionales. Con la Iglesia existió un acuerdo básico, que se tradujo en el poco velado apoyo electoral de 1946. El gobierno peronista mantuvo la enseñanza religiosa en las escuelas, y concedió la conducción de las universidades a personajes vinculados con el clericalismo hispanófilo. Reservó un lugar importante en el ceremonial público a los altos prelados, como monseñor Copello, e incorporó a su elenco político a algunos sacerdotes, como el padre Benítez, confesor de Eva Perón, o el padre Virgilio Filippo, fogoso cura párroco del barrio de Belgrano, que cambió el púlpito por una banca en el Congreso. Fue sin embargo una relación algo distante: un grupo importante de eclesiásticos —entre ellos monseñor Miguel D'Andrea—, preocupados por el autoritarismo creciente, se alineó firmemente en el lado de los opositores; otros lamentaron la renuncia de Perón a las consignas nacionalistas, y otros muchos miraron con reservas algunos aspectos de la política democratizadora de las relaciones

sociales, como por ejemplo la igualación de derechos entre hijos "naturales" y "legítimos".

Con respecto a las Fuerzas Armadas, aunque Perón recurrió habitualmente a oficiales para desempeñar funciones de importancia, se cuidó inicialmente tanto de inmiscuirse en su vida interna como de darles cabida institucional en el gobierno. Sobre todo, procuró conservar la identificación establecida en 1943 entre las Fuerzas Armadas y un gobierno del que se quería continuador: el 4 de junio, "olímpico episodio de la historia", siguió siendo un fausto fundador; temas centrales del gobierno, como la independencia económica, la unidad nacional y el orden, y sobre todo la imagen de un mundo en guerra donde la neutralidad se traducía en la "tercera posición", sirvieron para consolidar un campo de solidaridades común, alterado sin embargo por el estilo excesivamente plebeyo que los militares veían en el gobierno, y sobre todo por la presencia, acción y palabra, difíciles de aceptar, de la esposa del presidente.

Según la concepción de Perón, el Estado, además de dirigir la economía y velar por la seguridad del pueblo, debía ser el ámbito donde los distintos intereses sociales, previamente organizados, negociaran y dirimieran sus conflictos. Esta línea —ya esbozada en la década de 1930— se inspiraba en modelos muy difundidos por entonces, que pueden filiarse tanto en Mussolini como en el mexicano Lázaro Cárdenas, y rompía con la concepción liberal del Estado. Implicaba una reestructuración de las instituciones republicanas, una desvalorización de los espacios democráticos y representativos y una subordinación de los poderes constitucionales al Ejecutivo, lugar donde se asentaba el conductor, cuya legitimidad derivaba menos de esas instituciones que del plebiscito popular.

Paradójicamente, un gobierno surgido de una de las escasas elecciones inobjetables que hubo en el país recorrió con decisión el camino hacia el autoritarismo. Así, en 1947 reemplazó a la Corte Suprema mediante un juicio político escasamente convincente. Utilizó ampliamente el recurso de intervenir las provincias; en muchos casos —en Santa Fe, Catamarca, Córdoba, entre otros—, y en la mejor tradición argentina, lo hizo para resolver cuestiones entre sectores de su heterogénea cohorte de apoyos. Pero en un caso, en Corrientes, y sin que mediara conflicto alguno, lo usó para deponer al único gobernador no peronista elegido en 1946. Una ley acabó en 1947 con la autonomía universitaria, estableciendo que toda designación docente requería de un decreto del Ejecutivo. El Poder Legislativo fue formalmente respetado —el *corpus* legislativo elaborado en esos años fue abundante—pero se lo vació de todo contenido real: los proyectos se preparaban en oficinas de la Presidencia, y se aprobaban sin modificaciones; los opositores fueron acusados de desacato, excluidos de la Cámara o desaforados, como ocurrió en 1949 con Ricardo Balbín, y 'la discusión parlamentaria fue eludida recurriendo al "cierre del debate", especialidad del diputado Astorgano. En 1951, una modificación del sistema de circunscripciones electorales —diagramado por Román Subiza, secretario de Asuntos Políticos— redujo al mínimo la

representación opositora en la Cámara de Diputados. El avance del Ejecutivo llegó también al "cuarto poder": con recursos diversos, el gobierno formó una importante cadena de diarios y otra de radios, que condujo desde la Secretaría de Prensa y Difusión, administrada por Raúl Alejandro Apold, a quien la oposición solía comparar con el doctor Goebbels. Los diarios independientes fueron presionados de mil maneras: cuotas de papel, restricciones a la circulación, clausuras temporarias, atentados, y en dos casos extremos —*La Prensa* y *La Nueva Provincia*, en 1951— la expropiación. La reforma de la Constitución, realizada en 1949, acabó con la última y gran salvaguardia institucional al autoritarismo y estableció la posibilidad de la reelección presidencial. Dos años después, en noviembre de 1951, Juan Domingo Perón y J. Hortensio Quijano fueron reelectos, obteniendo en la ocasión —cuando votaron por primera vez las mujeres— alrededor de las dos terceras partes de los sufragios.

Para Perón, tan importante como afirmar la preeminencia del Ejecutivo sobre el resto de las instituciones republicanas fue dar forma al heterogéneo conjunto de fuerzas que lo apoyaba, proveniente de diferentes sectores, con tradiciones diversas, y muchas veces nutrido de cuadros y militantes sin experiencia ni formación política. A todo ello había que darle un disciplinamiento y organización acordes con los principios políticos más generales del peronismo, y además evitar tanto los conflictos internos como la posibilidad de que encarnaran y transmitieran tensiones y demandas desde la base de la sociedad. Para ello recurrió a un método muy tradicional, ya practicado por Roca, Yrigoyen y Justo: el uso de la autoridad del Estado para disciplinar las fuerzas propias, y uno novedoso, la utilización de su liderazgo personal e intransferible —compartido con su esposa—, que se constituyó naturalmente pero que luego fue cuidadosamente alimentado por la maquinaria propagandística. En el Congreso, Perón exigió de cada diputado o senador una renuncia en blanco, como garantía de su disciplina. El Partido Peronista, creado en 1947, adoptó una organización totalmente vertical, donde cada escalón se subordinaba a la decisión del nivel superior, hasta culminar en el líder, presidente del país y del partido, con derecho a modificar cualquier decisión partidaria. Se trataba de una versión local del célebre *Führerprinzip* alemán, pero su aplicación fue menos dramática: el Partido —manejado por el almirante Teisaire— se limitó a organizar las candidaturas, y Perón a arbitrar en los casos difíciles o a mencionar simplemente quiénes debían ser electos. La organización se modificó varias veces y, como mostró Alberto Ciria, los organigramas, cada vez más complejos, acentuaron la verticalidad. Finalmente, el Partido fue incluido dentro del Movimiento, junto con el Partido Peronista Femenino —que organizó Eva Perón— y la CGT, a las órdenes del Jefe Supremo, a quien se subordinaban el Comando Estratégico y los Comandos Tácticos.

Además de esta terminología militar, la organización incluía un elemento revelador: en cada nivel se integraba la autoridad pública ejecutiva respectiva —intendente, gobernador o presidente— con lo cual quedaba claro, y puesto

por escrito, que movimiento y nación eran considerados una misma cosa. Lo que inicialmente fue la doctrina peronista se convirtió en la Doctrina Nacional, consagrada en esos términos por la Constitución de 1949, que articulaba tanto al Estado como a la Comunidad Organizada. Estado y movimiento, movimiento y comunidad confluían en el líder, quien formulaba la doctrina y la ejecutaba, de manera elástica y pragmática, con su arte de conductor que aunque personal e intransferible podía ser enseñado a quienes asumieran los comandos subordinados. Se combinaban aquí las tradiciones del Ejército, donde la conducción es un capítulo fundamental del mando, y la de los modernos totalitarismos que, en su versión fascista, sin duda impresionaron a Perón.

Esta retórica era sin duda ajena a la tradición política principal del país, liberal y democrática, aunque su emergencia no puede resultar absolutamente extraña si se recuerda lo que fueron anteriormente las prácticas concretas: ni la identificación del partido con la nación, ni la marginación del Congreso, ni la identificación entre el jefe del Estado y el jefe del partido oficial eran novedades absolutas. Por otra parte, si el peronismo segó sistemáticamente los ámbitos de participación autónoma, ya fueran estos partidarios, sindicales o civiles, y tuvo una tendencia a penetrar y "peronizar" cualquier espacio de la sociedad civil, no es menos cierto que encarnó y concretó un vigorosísimo movimiento democratizador, que aseguró los derechos políticos y sociales de vastos sectores hasta entonces al margen, culminando con el establecimiento del voto femenino y la instrumentación de medidas concretas para asegurar a la mujer un lugar en las instituciones. Los conceptos más tradicionales de democracia no alcanzan a dar cuenta de esta forma, muy moderna, de democracia de masas.

Esta singular forma de democracia se constituía desde el Estado. Los diversos actores que conformaban su base de sustentación eran considerados como "masas", es decir un todo indiferenciado, cuya expresión autónoma o específica no era valiosa, y que debía ser moldeado, inculcándole la "doctrina". A ello se dirigía la propaganda masiva, que saturaba los medios de comunicación —utilizados por primera vez en forma sistemática— y también la escuela. El régimen tuvo una tendencia definida a "peronizar" todas las instituciones, y a convertirlas en instrumentos de' adoctrinamiento. Sería difícil dudar de la eficacia de estos mecanismos, que se traducían en un sufragio masivo en favor de Perón o los candidatos por él indicados.

Pero la forma más característica y singular de la política de masas eran las movilizaciones y concentraciones. Realizadas en días fijos —1° de mayo, 17 de octubre— y en ocasiones especiales, cuando había que celebrar algo o ratificar alguna decisión política— conservaban mucho del *pathos* desafiante, espontáneo y contestatario de la movilización fundadora del peronismo, pero ritualizado y atemperado, más en memoria y potencia que en acto. Ya no eran espontáneas sino convocadas, con suministro de medios de transporte; ordenadas y encuadradas, hasta incluyeron controles de asistencia. Sobre

todo, eran jornadas festivas, despojadas de elementos de enfrentamiento real, salvo con la metáfora "oligarquía" o "antipatria", que expresaban antes la unidad de la nación que de sus conflictos: en la "fiesta del trabajo" —según el inspirado verbo de Oscar Ivanissevich, ministro de Educación y vate oficial— los trabajadores, "unidos por el amor de Dios", se reunían "al pie de la bandera sacrosanta". En rigor, este proceso no era nuevo y la lenta transición de la jornada combativa a la festiva se inicia en la década de 1920. En rigor también, la tradición contestataria era recordada y mantenida tanto por Perón como sobre todo en las palabras ásperas, llenas de furor plebeyo y desafío clasista de Eva Perón.

Al renovar el pacto fundador entre el líder y el pueblo, las grandes concentraciones cumplían un papel fundamental en la legitimación plebiscitaria del régimen, que era considerada mucho más importante que la electoral. Además, eran el momento privilegiado en la constitución de una identidad, que resultaba tanto trabajadora y popular como peronista. Todo preparaba el momento privilegiado de la recepción del discurso del líder que, al apelar desde el "balcón" a los "compañeros", incluía tanto una definición de su lugar, más allá de las pasiones y de los conflictos, como del de quienes lo apoyaban y aceptaban su dirección —la patria, el pueblo, los trabajadores—, y de los enemigos, calificados como la antipatria y, como tales, excluidos del sistema de convivencia, pues "a los enemigos, ni justicia". Silvia Sigal y Eliseo Verón han señalado la incorporación definitiva a la cultura política popular de dos elementos difícilmente asimilables a la tradición democrática más clásica: la verticalidad y el faccionalismo, convertidos desde entonces en valores políticos.

¿Hasta qué punto esto fue responsabilidad exclusiva del peronismo? La oposición terminó ocupando el lugar asignado en este sistema. La derrota de 1946 desarticuló totalmente el proyecto de la Unión Democrática—última figuración del Frente Popular— y enfrentó a los partidos opositores con una cuestión difícil: desde dónde enfrentar a Perón. Los socialistas, apartados de toda representación política, mantuvieron su caracterización de "nazifascismo", denunciaron los avances hacia el autoritarismo y consideraron que la prioridad era acabar con el régimen; los grupos de socialistas que intentaban una postura más comprensiva hacia los trabajadores que habían adherido al peronismo no lograron quebrar la sólida y ya anquilosada estructura partidaria. Algo similar ocurrió en el Partido Comunista: hubo un período de acercamiento y simpática comprensión, por la vía de las organizaciones de trabajadores, que culminó con la expulsión de los dirigentes que la propiciaron. Los conservadores sufrieron el cimbronazo de una cantidad de dirigentes que se "pasaron", pero finalmente se reconstituyó, en una línea de oposición frontal, fundada en la defensa de la legalidad republicana.

En el radicalismo el proceso fue más amplio. La derrota de 1946 abrió el camino a la renovación partidaria y una coalición de intransigentes renovadores y sabattinistas, críticos de la estrategia de la Unión Democrática,

desplazó a los "unionistas" que venían del tronco alvearista. En 1947, en la Convención de Avellaneda, el Movimiento de Intransigencia y Renovación había formulado sus principios, que transformaban sustancialmente el programa radical, hasta entonces ambiguo e impreciso. El MIR, sin renunciar a la defensa de la Constitución y de la República, combatió al peronismo desde una posición que se presentaba como más progresista, tanto en lo social como en lo nacional, y lo hizo con más soltura a medida que el régimen, por las exigencias del gobierno, fue abandonando sus posiciones iniciales más avanzadas. Mientras el grupo unionista optaba por el desafío frontal y especulaba con un golpe militar, los intransigentes discutieron en el Congreso cada uno de los proyectos gubernamentales, coincidieron a veces, y señalaron objeciones fundadas y atendibles en muchos casos. En el grupo de los cuarenta y cuatro diputados, presidido por Ricardo Balbín y Arturo Frondizi, se formó toda la dirigencia radical posperonista. Pero no llegaron a constituirse en una verdadera oposición democrática, en parte porque entre muchos de ellos el faccionalismo era también muy fuerte, pero sobre todo porque la mayoría peronista no estaba dispuesta a convertir al Congreso en un lugar de debate, e incluso a tolerar que fuera una tribuna de los disidentes con la Doctrina Nacional. Todos los recursos se usaron para acallar sus voces y, finalmente, para ubicarlos en la posición que previamente se les había asignado.

Un conflicto cultural

La virulencia del discurso político y sobre todo los encendidos ataques a la "oligarquía", no se correspondían con una conflictividad social real ni mucho menos con una guerra social, como parecía desprenderse de aquéllos. El régimen peronista no atacó ningún interés fundamental de las clases altas tradicionales, aunque algunos segmentos de ellas pudieran verse afectados por la política agropecuaria. Las instituciones que expresaban los intereses corporativos de los propietarios —la Sociedad Rural, la Unión Industrial y otras— no se opusieron públicamente al gobierno, e incluso aceptaron discretas cooptaciones. Hubo sí, nuevas incorporaciones de empresarios exitosos, y sobre todo de quienes supieron aprovechar vinculaciones y prebendas para hacer jugosos negocios. En el imaginario social ocupó un lugar importante el "nuevo rico", el *parvenu*, que se mezcló con otros nuevos integrantes de una elite dirigente que, ciertamente, era mucho más variada que la anterior a 1945: los sindicalistas ocuparon puestos visibles, junto con una nueva camada de políticos, deportistas o artistas. Las clases medias tradicionales tuvieron quizá más motivos de queja, especialmente quienes gozaban de rentas fijas, reducidas por la inflación, o quienes perdieron sus empleos estatales. Pero en cambio se nutrieron de nuevos y vigorosos contingentes llegados por las vías más tradicionales de la sociedad argentina: la modesta prosperidad económica de los trabajadores, y la educación de sus hijos, pues una de las características salientes de estos años fue la formidable expansión de la matrícula en la enseñanza media y la no menos notable expansión de la universitaria.

Las migraciones internas habían venido modificando profundamente la fisonomía de los sectores populares. En ellas, la crisis de la agricultura pampeana operó tan fuertemente como la oferta de trabajo industrial, y estabilizada ésta, fue la mera atracción de la vida en las ciudades, que reflejaba los procesos de modernización y aparición de expectativas y aspiraciones nuevas, generalizadas por la radio y el cine. Durante los años finales de la década del treinta y el período de la guerra predominaron los migrantes de las zonas pampeanas más cercanas y luego se incorporaron los provenientes del Interior tradicional, con quienes se construyó la imagen social del "cabecita negra". Con ellos se expandieron los cinturones de las grandes ciudades —el Gran Buenos Aires, Gran Rosario, Gran Córdoba— donde se repitió una historia social ya conocida: el lote modesto, la casita precaria, construida por partes —con la novedad de los planes sociales de vivienda— y el esfuerzo societario para urbanizar el lugar.

La novedad de esta historia, que prolongaba el secular proceso de expansión de la sociedad argentina, fue la brusca incorporación de los sectores populares a ámbitos visibles, anteriormente vedados. Más allá de su significado político, el 17 de octubre fue simbólico precisamente por eso. Estimulados y protegidos por el Estado peronista, y aprovechando una holgura económica novedosa, los sectores populares se incorporaron al consumo, a la ciudad, a la política. Compraron ropas y calzados, y también radios o heladeras, y algunos las "motonetas" que el líder se encargaba de promocionar. Viajaron por el país, gracias a los planes de turismo social, y accedieron a los lugares de esparcimiento y diversión, aprovechando la generalización del sábado inglés y aun el asueto sabatino total para algunos de ellos. Se llenaron las canchas de fútbol, las plazas y parques, el Parque Retiro y los lugares de baile —como La Enramada— donde la música folclórica recordaba la vieja identidad y facilitaba la asunción de la nueva. Sobre todo, fueron al cine, la gran diversión de aquellos años. Invadieron la ciudad, incluso el centro, y lo usaron todo. Ejercieron plenamente una ciudadanía social, que nació íntimamente fusionada con la política.

El reconocimiento de la existencia del pueblo trabajador y el ejercicio de nuevos derechos estuvo asociado con la acción del Estado, y la justicia social fue una idea clave y constitutiva tanto del discurso del Estado —que derivó de ella la doctrina llamada "justicialista"— como de la nueva identidad social que se constituía. Los materiales de esta idea se habían ido conformando en las dos décadas anteriores, tanto por obra de las experiencias de los sectores populares como de diversas fuentes discursivas, del socialismo a la doctrina de la Iglesia. Todo ello había decantado en una percepción, racional y emotiva a la vez, de las injusticias de la sociedad —manifiesta tanto en un discurso de Alfredo Palacios como en una película de Tita Merello— unida a una acción racional para solucionar sus aspectos más visibles, para alcanzar mejoras, quizá modestas pero posibles e inmediatas, en las que el Estado benefactor tenía la responsabilidad principal y la propia organización de los

interesados era relegada a una situación ancilar. Lo singular —ha subrayado con justeza José Luis Romero— fue la combinación de esta nueva concepción con aquella otra más espontánea y verdaderamente constitutiva de la sociedad argentina moderna: la ideología de la movilidad social. La acción del Estado no sustituía la clásica aventura individual del ascenso, sino que aportaba el empujón inicial, la eliminación de los obstáculos más gruesos, para que los mecanismos tradicionales pudieran empezar a funcionar. La justicia social venía a completar así el proceso secular de integración de la sociedad argentina, y la identidad que, se constituyó entorno de ella fue a la vez obrera e integrativa. A diferencia de las décadas anteriores, todo lo referente al mundo del trabajo, y a la misma dignidad inherente a él, tuvo un significado central, reforzado por el papel de la institución obrera por excelencia —el sindicato— en innumerables ámbitos de la vida, laboral y no laboral, pues de la mano del sindicato los trabajadores tanto aseguraron su salud como accedieron al turismo o al deporte. Los trabajadores se integraron a la nación de la mano del Estado y a la vez se incorporaron a la sociedad establecida, de cuyos bienes acumulados aspiraban a disfrutar, con prácticas típicas ya desarrolladas por quienes, en épocas anteriores, habían seguido el mismo proceso de integración.

El Estado facilitó el acceso a dichos bienes. Al fuerte estímulo a la educación —particularmente en el nivel medio— se agregó la protección y promoción de las diversas actividades culturales: conciertos y representaciones teatrales a precios populares, apertura del Teatro Colón a actividades más variadas, y una fuerte protección a la industria cinematográfica, que se sumaron al crecimiento natural de la radiofonía. El Estado distribuía, y el público recibía, junto con los bienes, una dosis masiva de propaganda. La mayoría de los diarios y todas las radios fueron manejadas, directa o indirectamente, desde la Secretaría de Prensa y Difusión. El agudo Enrique Santos Discépolo o el mediocre Américo Barrios fueron las voces de una propaganda oficial que también desbordaba en los relatos deportivos de Luis Elías Sojít, y que finalmente se instaló en las escuelas, cuando *La razón de mi vida*, el libro de Eva Perón, fue establecido como texto obligatorio.

El Estado facilitaba el acceso a la cultura erudita, pero sobre todo distribuía cultura "popular", que incluía mucho de lo folclórico tradicional —como lo podían expresar Antonio Tormo o Alberto Castillo— y mucho de comercial. Pero ese conjunto, distribuía en el imaginario de la sociedad los modelos sociales y culturales establecidos, de la misma manera que, décadas antes, lo había hecho la revista *El Hogar*: eso es lo que se veía en el cine de los teléfonos blancos, con su imagen convencional de las clases tradicionales, tal como las podía encarnar Zully Moreno, o en los libros escolares, donde los trabajadores eran representados en su hogar, sentados en un sillón, con saco y corbata y leyendo el diario. Distribuía también una cierta visión de la tradición nacional, manifiesta en la preocupación por develar el mítico ser nacional que debía unificar a la comunidad. Curiosamente, para este movimiento alguna vez surgido del nacionalismo, esa tradición se encarnaba en primer lugar en San Martín, el Libertador —el centenario de su muerte fue profusamente

conmemorado—, que prefiguraba al segundo Libertador, y luego — conspicuamente ausente Rosas— en la más clásica tradición liberal, la de Urquiza, Mitre, Sarmiento y Roca, con cuyos nombres fueron bautizadas las líneas de los ferrocarriles nacionalizados. Ese momento fundacional se separaba del presente por un pasado negro y ominoso, de una densidad tal que el peronismo —sin perder su arraigo en la tradición— podía exhibir plenamente su dimensión fundadora y revolucionaria, legitimada en un futuro en construcción. Un pasado negro y un presente rosa, un antes y un ahora, eran los elementos centrales que organizaban los textos y discursos peronistas.

Esa construcción discursiva, y la forma elegida de difundirla, no necesitó tanto de verdaderos intelectuales como de mediadores un poco militantes y otro poco obsecuentes. Ciertamente, pese al apoyo disponible, la creación intelectual y artística fue escasa en el medio oficial, donde pueden recordarse pocas figuras notables: el filósofo Carlos Astrada, los escritores Leopoldo Marechal y María Granata, el poeta Horacio Rega Molina. Los mejores intelectuales y creadores críticos e innovadores convivieron, junto con los de la antigua cultura establecida y un poco caduca, en instituciones surgidas al margen del Estado, y animadas por un cierto fuego sagrado: Ver y Estimar, Amigos de la Música, el Colegio Libre de Estudios Superiores, que funcionó como Universidad alternativa, y la revista *Sur*, donde el esteticismo cosmopolita y apolítico hacía las veces de una ideología opositora. Quizá lo más novedoso de estos años en materia de creación cultural haya sido el auge del teatro "independiente", cultivado por artistas no profesionales, donde encontró terreno adecuado una renovada producción nacional —a partir de *El puente*, de Carlos Gorostiza, estrenado en 1949— que contrastó con la chatura repetitiva de los grandes teatros comerciales o estatales.

El peronismo había surgido, en los años de la guerra y la inmediata posguerra, en el marco de un fuerte conflicto social, alimentado desde el mismo Estado. Con el correr del tiempo, derivó por una parte en un fuerte enfrentamiento político, que separaba al oficialismo de la oposición, y por otra en un conflicto que, más que social, era cultural. El Estado había trabajado mucho para encuadrar los conflictos sociales en una concepción más general de la armonía de clases, la comunidad de intereses y la negociación, que él arbitraba, y a la vez había desplazado el conflicto al campo del imaginario de la sociedad.

Fue un conflicto cultural, infinitamente más violento que el existente entre los intereses sociales básicos, el que opuso lo "oligárquico" con lo "popular". Lo popular combinaba las dimensiones trabajadora e integrativa, y carecía de aquellos componentes clasistas que, en otras sociedades, se manifiestan en una cultura cerrada y centrada en sí misma. No se apoyó en un modelo cultural diferente del establecido sino en una manera diferente y más amplia de apropiarse de él, de participar de algo juzgado valioso y ajeno. En esa perspectiva, la oligarquía —fría y egoísta— era quien pretendía restringir el acceso a esos bienes y excluir al pueblo. Se trataba de una definición precisa cierto sentido, sobre todo ético, pero socialmente muy difusa, y permitía combinar un violento ataque discursivo —

particularmente en la voz plebeya de Eva Perón— con escasas acciones concretas en contra de los supuestos destinatarios, la 'oligarquía encerrada en sus madrigueras". Inversamente, desde la oposición, la resistencia a las prácticas políticas del peronismo se combinaba con la irritación ante la forma peronista del proceso de democratización social: hubo en ellos mucho de reacción horrorizada frente a la invasión popular de los espacios antaño propios, y mucho de ira ante la pérdida de la deferencia y el respeto, que juzgaban producto de las medidas demagógicas del régimen. Su respuesta fue, junto con el ataque al régimen, la ridiculización del *parvenu*, tanto del nuevo rico como del humilde habitante urbano, incapaz de manejar con destreza los instrumentos de la nueva cultura o de comprender sus claves, y a menudo encandilado con sus manifestaciones más superficiales.

Fueron dos configuraciones culturales antagónicas y excluyentes, que se negaron mutuamente pero que compitieron por la significación de un campo común. En torno de Eva Perón se libró un combate de ese tipo. Confrontaron dos versiones antagónicas e igualmente estilizadas, frente a las cuales el verdadero personaje se fue esfumando: como ha mostrado Julie Taylor, a la Dama de la Esperanza se contrapuso la Mujer del látigo, dos versiones de la misma imagen de la mujer y de sus funciones, elaborada por las clases media, de la cual unos y otros pretendían apropiarse. Más visible aún fue la disputa en torno de la imagen de los "descamisados", que en la práctica aludía al acto ritual de los dirigentes de sacarse el saco en las ceremonias oficiales, quizá para lucir sus camisas de seda. Originariamente, como el *sansculotte* francés, encierra todo el prejuicioso desprecio de la gente decente frente a un comensal inesperado; pero del otro lado, en lugar de una imagen diferente que cambiara los términos del conflicto asumiendo la propia identidad obrera, hubo una asunción positiva del descamisado, una apropiación y resignificación de la imagen del otro, como si el conflicto cultural se librara en el campo ya organizado por los sectores tradicionales.

Crisis y nueva política económica

La coyuntura externa favorable en la que surgió el Estado peronista comenzó a invertirse hacia 1949: los precios de los cereales y las carnes volvieron a su normalidad y los mercados se contrajeron, mientras que las reservas acumuladas, consumidas con poca previsión, se agotaron. La situación era grave, pues el desarrollo de la industria, quizá paradójicamente, hacía al país más dependiente de sus importaciones: combustibles, bienes intermedios como acero o papel, repuestos y maquinarias, cuya falta dificultaba el desenvolvimiento de la industria y provocaba, finalmente, inflación, paro y desocupación. Los primeros signos de la crisis llevaron en 1949 a la caída de Miguel Miranda, reemplazado por un equipo de economistas profesionales —encabezado por Alfredo Gómez Morales— que se encargó de iniciar los ajustes. Las medidas no evitaron que, tres años después, la crisis del sector externo se repitiera, agravada por dos sequías sucesivas. En ese duro invierno de 1952, la gente debió consumir un pan

negruzco, elaborado con mijo, faltó la carne y los cortes de luz fueron frecuentes. También en ese invierno murió Eva Perón, uno de los símbolos de la prosperidad perdida.

Precisamente en 1952 el gobierno adoptó con firmeza un nuevo rumbo económico, ratificado luego en el Segundo Plan Quinquenal, mucho más específico que el anterior, que debía tener vigencia entre 1953 y 1957. Para reducir la inflación, se restringió el consumo interno: fueron eliminados subsidios a distintos bienes de uso popular, se estableció una veda parcial al consumo de carne y se levantó el congelamiento de los alquileres; además, Perón hizo una apelación a la reducción voluntaria y consciente del consumo, de sorprendente efecto. Por otra parte, se proclamó la "vuelta al campo": el JAN, manejado por un "ministro liquidador", invirtió su mecanismo y empezó a estimular a los productores rurales con precios retributivos, al tiempo que se daba prioridad a la importación de maquinaria agrícola. Esta política, cuyos efectos no llegaron a ser apreciables, apuntaba a aumentar la disponibilidad de divisas para seguir impulsando el desarrollo del sector industrial, clave para todo el andamiaje del peronismo.

Por entonces, el estancamiento industrial era evidente. En los años anteriores, y al amparo de una amplia política proteccionista, había proliferado un extenso sector de medianos y pequeños establecimientos, en general muy poco eficientes, que subsistía de alguna manera al amparo de las grandes fábricas y de sus elevados precios. Las ramas de alimentos y de textiles, que encabezaran el crecimiento, habían llegado al límite de sus posibilidades de crecimiento. Otras ramas, como la metalúrgica, la de electrodomésticos, caucho, papel o petroquímica, tenían todavía amplias posibilidades en el mercado interno, pero se encontraban trabadas por diversas limitaciones. El principal problema del sector industrial era su reducida eficiencia, oculta por la protección y los subsidios que por distintas vías recibía del Estado. Las causas eran varias: a la maquinaria obsoleta se sumaba el deterioro de los servicios, particularmente la escasa electricidad y los deficientes transportes, sobre todo ferroviarios, cuya renovación el Estado había abandonado. En las fábricas, ausentes los incentivos que derivan de la competencia, habían subsistido procesos productivos ineficientes y costosos. Finalmente, la industria empleaba una alta proporción de mano de obra, y el peso de los salarios resultaba particularmente alto y difícil de reducir debido a la alta ocupación y a la fuerte capacidad sindical de negociación. La expansión de la demanda, que inicialmente compensara los costos salariales altos, había perdido su efecto dinamizador, de modo que el problema comenzó a ser gravoso para los empresarios.

La nueva política económica apuntó a esos problemas. Se restringió el crédito industrial y el uso de las divisas, y se dio una nueva prioridad a las empresas grandes y sobre todo a las industrias de bienes de capital: el proyecto siderúrgico de SOMISA fue reactivado y se procuró iniciar la fabricación de tractores y automóviles. Los contratos colectivos de trabajo —piedra angular de la política

sindical— fueron congelados por dos años. A principios de 1955 se convocó a empresarios y sindicalistas para discutir las cuestiones de la productividad y afloraron los temas que preocupaban a aquéllos: la ineficiencia de la mano de obra, el poder excesivo de los delegados de fábrica, el ausentismo de los lunes. También afloró una sorda inquietud gremial, expresada en parte en la reivindicación de la política originaria del régimen y en parte en huelgas, como la metalúrgica de 1954, cuidadosamente acalladas por la disciplinada prensa oficial.

El gobierno puso sus mayores esperanzas en algo que desde entonces sería el tema central de las políticas económicas: la concurrencia de capitales extranjeros, que empezaron a ser imaginados por unos como la piedra filosofal y por otros como el caballo de Troya de la economía. En 1953 el gobierno sancionó una ley de Radicación de Capitales: pese a establecer importantes resguardos respecto de repatriación de utilidades o reenvío de ganancias, suponía una modificación fundamental respecto de los postulados de la independencia económica y la tercera posición. Esto ocurrió en el marco de una visible reconciliación con Estados Unidos, jalonada por el apoyo a su política en Corea y en Guatemala —donde en 1954 la CIA derribó al presidente Árbenz—, y el entusiasta recibimiento al hermano del presidente Eisenhower. En el marco de esta política comenzaron a concretarse algunos proyectos, que madurarían plenamente luego de 1955: la FIAT italiana se interesó en tractores, autos y motores; otro grupo italiano inició una acería en Campana, la Mercedes Benz se radicó para fabricar camiones y la Kaiser instaló en Córdoba una planta de automóviles, ya obsoleta en Estados Unidos. Lo más importante fue el proyecto petrolero: en 1954 el gobierno firmó con una filial de la Standard Oil de California un contrato de explotación de 40 000 hectáreas en la provincia de Santa Cruz, con amplios derechos. Se trataba de una medida que desafiaba convicciones hondamente arraigadas —e incluso tina disposición de la Constitución de 1949— y que suscitó un amplio debate público, por lo que Perón prefirió enviarlo al Congreso para su ratificación. Allí fue discutido tanto por la oposición —Arturo Frondizi publicó por entonces *Petróleo y política*— como por sectores del propio peronismo, cuya voz más visible fue el joven diputado John William Cooke, y no llegó a ser ratificado.

Los logros de la nueva política económica fueron modestos: se redujo la inflación y se reequilibró la balanza de pagos, pero no se apreciaron cambios más sustanciales en el agro y la industria. Ciertamente; esa política marcaba un rumbo nuevo, que en sus líneas básicas anticipaba la de los gobiernos posperonistas, pero su aplicación fue moderada y tuvo en cuenta la necesidad de resguardar la situación de los sectores populares, lo que en cierto sentido resultó poco compatible con la ortodoxia económica que la inspiraba: ni se recurrió a la devaluación —el gran instrumento con el que posteriormente se operaron rápidas y sustanciales transferencias de ingresos entre sectores— ni se redujo el gasto público, que en buena medida subsidiaba a los sectores asalariados. En ese sentido, esta nueva política económica se mantenía dentro de la tradición peronista.

Los comienzos de la crisis económica fueron acompañados de importantes manifestaciones de disconformidad entre dos de los principales apoyos del

régimen, los sindicatos y el Ejército, cuya solución implicó un avance en el camino del autoritarismo. Hacia 1948 el Estado había logrado estabilizar y controlar el frente gremial, pero desde el año siguiente las huelgas, aunque Menores en número, fueron más duras y con una veta crecientemente opositora. En 1949, en dos ocasiones fue la FOTIA, que nucleaba a los trabajadores azucareros de Tucumán; finalmente fue declarada ilegal y se intervino el sindicato. Luego fueron los bancarios, los gráficos y los ferroviarios, a fines de 1950 y principios de 1951. Estas últimas constituyeron un fuerte desafío al régimen, por su visibilidad imposible de ignorar y porque ocurrieron al margen de la complaciente e ineficaz dirección del sindicato; los trabajadores, golpeados por la política de hacer menos costosos los ferrocarriles, siguieron a antiguos gremialistas opositores, y su voluntad ni siquiera pudo ser torcida por Eva Perón, que jugó su prestigio recorriendo patéticamente los talleres ferroviarios y reclamando a "sus" trabajadores solidaridad con Perón. Éste finalmente optó por aplicar una dura represión: prisión a los dirigentes rebeldes y movilización militar a los obreros.

Los problemas con los militares siguieron a un avance inicial del régimen sobre la institución, ante la que al principio había mantenido una cierta prescindencia. El general Franklin Lucero, nuevo ministro de Ejército, se preocupó de ganar apoyos entre los oficiales —creció el escalafón, los ascensos se agilizaron y hubo variadas prebendas para jefes y oficiales— y también entre los suboficiales, beneficiados con el derecho al voto —hasta entonces, una *capitis diminutio* los colocaba en el nivel de los irresponsables—, el uso de uniforme similar a los oficiales y un sistema de becas para educar a sus hijos, a lo que se agregó la posibilidad de "abrir los cuadros" y permitir su ascenso al cuerpo de oficiales. Todos estos beneficios, que suponían también el incremento de las rivalidades y suspicacias internas, apuntaban a lograr un Compromiso más pleno por parte de quienes debían ser un componente central de la comunidad organizada.

El compromiso solicitado puso en evidencia todas las reticencias y dudas que el régimen —no ya el presidente constitucional— suscitaba entre los militares. Se preguntaban acerca de la solidez de un orden proclamado, pero basado en la agitación popular permanente; se indignaban ante avances flagrantes del autoritarismo, como la expropiación del diario *La Prensa*, y se irritaban sobre todo con Eva Perón, su injerencia en los asuntos del Estado y su peculiar estilo. La proclamación de su candidatura a la vicepresidencia, en el Cabildo Abierto del Justicialismo del 22 de agosto de 1951, a la que ella renunció días después, fue sin duda difícil de tolerar. Éstos y quizás otros motivos dieron el espacio mínimo para la acción de grupos de oficiales decididos a derribar a Perón, vinculados con aquellos políticos opositores embarcados ya en la misma ruta. El 28 de septiembre de 1951 el general Benjamín Menéndez encabezó un intento, notoriamente improvisado y fácilmente sofocado. Si bien se puso de manifiesto la firme posición legalista del grueso del Ejército, también constituyó un llamado de atención para un régimen que hasta entonces no había tropezado con oposición consistente alguna. Perón

aprovechó la intentona —que calificó de "chirinada"— para establecer el estado de guerra interno y mantenerlo hasta 1955. Con ese instrumento se dedicó a depurar los mandos militares de adversarios, sospechosos, tibios o vacilantes. A la vez, en plena campaña electoral, restringió aún más la acción de los políticos opositores y obtuvo un aplastante triunfo en noviembre de ese año, en las primeras elecciones con sufragio femenino: logró 64% de los votos, la totalidad de los senadores y el 90% de los diputados, gracias a las ventajas del sistema de circunscripciones.

Consolidación del autoritarismo

Perón inició un segundo periodo visiblemente consolidado por el nuevo plan económico, que parecía no tener éxito, la victoria sobre rebeldes militares y sindicalistas y el espectacular triunfo electoral. Hasta la muerte de Evita, sin duda un golpe muy duro para el régimen, fue ocasión para unos funerales convertidos en singular manifestación plebiscitaria. El fin de la etapa revolucionaria —visible en la nueva política económica y en la normalización de las relaciones con Estados Unidos, y también simbolizado por el trágico acallamiento de la voz más dura del régimen— podía hacer presuponer una marcha hacia la pacificación política y una relación más normal con los que disentían, en el marco de un cierto pluralismo. Pero había otras fuerzas que empujaban al mantenimiento y acentuación del rumbo autoritario: el propio desenvolvimiento de la maquinaria puesta en marcha, que avanzaba inexorablemente sobre las zonas no controladas, y la poca predisposición para reconstruir los espacios democráticos por parte de muchos de los opositores, jugados a la eliminación del líder.

En los tres años finales de su gobierno Perón tuvo una conducta errática. Fue evidente la dificultad para llenar el vacío dejado por la muerte de Eva Perón: tanto en la Fundación, como en el nuevo Partido Peronista Femenino o la misma CGT se advirtió un manejo burocrático y una pérdida de iniciativa. Perón mismo pareció perderla, manifestó cierto cansancio y menor concentración en el trabajo y la conducción política; pasó mucho más tiempo en la residencia de Olivos y se dedicó a exhibirse rodeado por las adolescentes de la Unión de Estudiantes Secundarios, instaladas en la misma residencia, o a encabezar desfiles juveniles en motoneta —la última novedad en sustitución de importaciones—, luciendo un llamativo gorrito de béisbol.

La Unión de Estudiantes Secundarios (VES) era precisamente una de las nuevas manifestaciones de esa vía autoritaria, que procuraba encuadrar todos los sectores de la sociedad en organizaciones controladas y "peronizadas". La máquina plebiscitaria, perfectamente organizada, producía regulares y previsibles convocatorias a la Plaza. Se avanzó en la "peronización" de la administración pública y la educación, con la exigencia de la afiliación al partido, la exhibición del "escudito" o el luto por la muerte de Eva Perón, la donación de sueldos para la Fundación y todo tipo de manifestaciones celebratorias del líder y su esposa, cuyos nombres fueron impuestos a estaciones ferroviarias,

hospitales, calles, plazas, ciudades y provincias. La "peronización" llegó a las Fuerzas Armadas: hubo cursos de adoctrinamiento justicialista, y las promociones y selección de jefes obedecieron desembozada-mente a razones políticas. Los espacios de la oposición fueron reducidos al mínimo, en la prensa y en el Parlamento, donde el doctor Cámpora, presidente de la Cámara de Diputados, proclamó la superioridad de la obsecuencia sobre la consecuencia.

Mientras por esa vía el régimen marchaba hacia el totalitarismo, procuraba simultáneamente —aunque con menor consecuencia— reconstruir un espacio de convivencia con los opositores, empezando por un objetivo mínimo: el reconocimiento recíproco. Encontró alguna recepción en los partidos, para quienes su situación en los bordes mismos de la ilegalidad generaba tensiones difíciles de soportar. Algunos de sus dirigentes se animaron a acercarse al gobierno y dialogar: la respuesta que encontraron fue tan cálida como dura la crítica de sus compañeros reluctantes. Primero fue, en 1951, una entrevista secreta del conservador Reynaldo Pastor. Luego, un ofrecimiento público de un grupo de dirigentes del Partido Comunista, encabezado por Juan José Real, que propuso integrarse a un Frente Popular Unido, pero chocó con el sólido anticomunismo peronista. Finalmente, a fines de 1952, fue un veterano dirigente socialista, Enrique Dickmann, quien negoció con Perón la liberación de presos políticos socialistas y la reapertura del periódico *La Vanguardia*, para ser de inmediato expulsado del partido. Con apoyo oficial, Dickmann fundó el Partido Socialista de la Revolución Nacional, que recolectó disidentes varios de la izquierda, con el que Perón proyectó infructuosamente dividir al socialismo.

Este tenue comienzo de una apertura —no declarada por ninguna de las dos partes— terminó bruscamente en abril de 1953: durante una concentración, y mientras hablaba Perón, estallaron en Plaza de Mayo bombas colocadas por grupos opositores lanzados al terrorismo y murieron varias personas. La respuesta fue en la misma clave violenta: grupos peronistas incendiaron la Casa Radical, la Casa del Pueblo socialista y el Jockey Club, centro emblemático de la ambigua y ubicua "oligarquía"; la Policía, llamativamente pasiva, tornase activa para impedir el incendio del diario *a Nación*. A esa explosión de terror administrativo siguió una amplia e indiscriminada detención de dirigentes y personalidades opositoras, que incluía desde Ricardo Balbín a Victoria Ocampo. Pero en la segunda mitad del año el régimen se ablandó y aceptó liberar a los presos siempre que los partidos lo pidieran y dieran así prueba de reconocimiento al régimen, conducta que, discretamente, siguieron los partidos menores. En diciembre, finalmente, una ley de amnistía permitió liberar a la mayoría. Al año siguiente, 1954, la convocatoria a elecciones para designar vicepresidente —Quijano había muerto apenas reelecto— llevó a montar nuevamente el escenario y la maquinaria electoral: el almirante Teisaire —que administraba el partido— derrotó con la tradicional amplitud a Crisólogo Larralde, uno de los más destacados dirigentes de la intransigencia radical.

Por entonces el radicalismo había definido su perfil, encontrando un ángulo de oposición posible a un régimen que giraba simultáneamente al conservadurismo y al autoritarismo. Al igual que los otros partidos, los radicales debían soportar, desde 1946, una dura división interna. Los unionistas, herederos del alvearismo y la Unión Democrática, estaban totalmente jugados a la abstención, la ruptura total y el golpe militar, y los sabattinistas de Córdoba se habían plegado a esa línea. El grupo de Intransigencia y Renovación, en cambio, insistió desde el comienzo en la lucha institucional e ideológica, y siguió haciéndolo pese a la reducción casi total de los espacios. En 1954 ganó definitivamente el control del partido, cuando Arturo Frondizi alcanzó la presidencia del Comité Nacional. Acusado de "rojo" por sus enemigos internos, Frondizi había definido una imagen original de político intelectual, reforzada por la publicación de su libro *Petróleo y política*. Con él, había lanzado la propuesta de combatir al peronismo desde lo que éste tenía de más progresista, y sin renunciar a la crítica institucional, reivindicar la reforma agraria y el antiimperialismo, tema que los contratos petroleros habían tornado urticante.

Puede especularse sobre la sinceridad de esta propuesta y la posible emergencia de una clase política renovada. Pero ciertamente, en 1954 se ubicaba —como lo ha señalado Félix Luna— en el cuadro general tiene una cierta reapertura del debate público, que coincidía con un envejecimiento del régimen y de su líder. Por entonces, la revista *Esto Es* practicaba un periodismo abierto que se distinguió de la monótona apología de la prensa oficial; el periódico *De Frente*, de John William Cooke, pareció introducir en el peronismo un inesperado debate interno, que en ese movimiento verticalista no reconocía antecedente alguno; las revistas *Imago Mundi* y *Contorno* abrían una alternativa cultural y mostraban un renovado interés por la actualización del mundo intelectual. Ese año, la fundación del Partido Demócrata Cristiano parecía indicar —como ha dicho Tulio Halperin— que la Iglesia se sumaba a esta visión en cierto modo póstuma del régimen envejecido.

La caída

La fundación del Partido Demócrata Cristiano marcó el comienzo del conflicto entre Perón y la Iglesia, que rápidamente llevó a su caída. Pese a que había múltiples razones, no era un conflicto inevitable; dejarse llevar a él fue sin duda un grave error, y la señal de que ese hábil político —tan capaz de unificar el campo propio como de explotar las debilidades del adversario— había perdido muchas de sus capacidades.

La Comunidad Organizada —o más modestamente, la peronización de las instituciones de la sociedad— era un proyecto con una dinámica propia, ejecutado por un conjunto de funcionarios, que ya marchaba independientemente de la voluntad o el arte conductivo del líder. El Ejército, al principio resguardado en su independencia y profesionalidad, había

sucumbido en su camino y las voces disconformes eran cada vez más fuertes. Pero la Iglesia, con la que inicialmente se había establecido un acuerdo mutuamente conveniente, era irreductible a él, y por eso potencialmente enemiga, máxime cuanto en la compleja institución tenían un lugar no despreciable viejos enemigos del régimen —identificados con la oposición— y nuevos disidentes, quejosos de distintos aspectos de la nueva política, como el abandono de las consignas nacionalistas. El Estado peronista y la Iglesia empezaron a chocar en una serie de campos específicos. La Iglesia era sensible a los avances de aquél en el terreno de la beneficencia, a través de la Fundación, y en el de la educación; aquí, al desagrado por el creciente culto laico al presidente de la Nación y su esposa se agregaba la preocupación por los avances del Estado en la organización de los estudiantes secundarios, en un contexto de sombrías sospechas de corrupción. Al gobierno le turbaba la conspicua intromisión de la Iglesia en la política, con la Democracia Cristiana, y la más solapada en el campo gremial que, desde el punto de vista del régimen, resultaba francamente subversiva.

El conflicto estalló en septiembre de 1954, cuando en Córdoba compitieron dos manifestaciones celebratorias del día del estudiante, una organizada por los católicos y otra por la UES. En noviembre Perón lanzó su ataque contra la Iglesia; el enfrentamiento pareció enfriarse en seguida, pero se agudizó en diciembre, luego de la multitudinaria procesión en Buenos Aires en el día de la Inmaculada Concepción. El ataque mostró la verticalidad alcanzada en el aparato político oficial: todos a una, con escasas disidencias, descubrieron los tremendos vicios de la Iglesia. Aunque se intentó limitarlo a "unos pocos curas", fue un ataque feroz, asombroso para una sociedad que desde 1930 había retrocedido tanto en su aprecio por los valores del laicismo. Se prohibieron las procesiones, se suprimió la enseñanza religiosa en las escuelas, se introdujo —en una ley en vías de aprobación referida a otra cuestión— una sorpresiva cláusula que permitía el divorcio vincular, se autorizó la reapertura de los prostíbulos y se envió un proyecto de reforma constitucional para separar la Iglesia del Estado. Muchos sacerdotes fueron detenidos y los periódicos se llenaron de denuncias públicas y comentarios groseros sobre la conducta y moralidad de prelados y sacerdotes.

La defensa de la Iglesia no fue menos eficaz y demostró su poder como institución, en una sociedad que sin embargo no se caracterizaba por su devoción. Atacada por los medios de comunicación monopolizados por el gobierno, inundó la ciudad con todo tipo, de panfletos, mientras sus asociaciones laicas, y particularmente la Acción Católica, movilizaron sus cuadros, engrosados por los opositores, que encontraron finalmente la brecha en el régimen y no se sintieron inhibidos por la tonalidad clerical, nacionalista e integrista que predominaba en la acción eclesiástica. El 8 de junio, el día de Corpus, se celebró una multitudinaria procesión; el jefe de Policía—luego se demostró— hizo quemar una bandera argentina y acusó de ello a los opositores católicos. El 16 de junio se produjo un levantamiento de la Marina contra Perón.

Difícilmente la génesis del levantamiento se encontrara en este conflicto, pues la Marina era la más laica y liberal de las tres fuerzas, pero los golpistas— oficiales y políticos opositores— encontraron aquí su ocasión. El proyecto de los marinos —verdaderamente descabellado— consistía en bombardear la Casa de Gobierno para asesinar a Perón; su ejecución, 'totalmente defectuosa, culminó en el bombardeo y ametrallamiento de una concentración de civiles reunida en la Plaza de Mayo para apoyar a Perón, que causó unas trescientas muertes. La intentona fracasó rápidamente y el Ejército demostró otra vez su fidelidad a las instituciones legales. Como en 1953, la primera reacción del régimen fue el terror administrativo: grupos visiblemente impunes incendiaron la Curia metropolitana y varias iglesias de la Capital.

También como en ocasiones anteriores, esta explosión de furia fue seguida de una actitud conciliadora de Perón que, aunque triunfador, había perdido mucho de su libertad de maniobra, y en cierto modo era prisionero de sus salvadores militares. Súbitamente, concluyeron los ataques a la Iglesia, que molestaban profundamente a la mayoría de los jefes militares. Se ensayó una renovación de los cuadros dirigentes, excluyendo a los personajes más conflictivos y convocando a otros con mayor aptitud para el diálogo, y se llamó a la oposición a negociar. Perón declaró solemnemente que dejaba de ser el jefe de una revolución y pasaba a convertirse en el presidente de todos los argentinos. Los dirigentes opositores fueron invitados a abrir un debate público, utilizando los medios de prensa del Estado, incluyendo la cadena nacional de radiodifusión, a través de la cual pudo oírse a Arturo Frondizi invitar al gobierno a volver a la senda republicana y formular, con sobriedad, un verdadero programa de gobierno alternativo. Otros dirigentes pudieron hablar, pero al socialista Alfredo Palacios —que reclamó la renuncia del presidente— no se lo autorizó. Por entonces, Perón había concluido que la posibilidad de abrir un espacio para la discusión democrática que lo incluyera era mínima. El 31 de agosto, luego de presentar retóricamente su renuncia, convocó —por última vez— a los peronistas a la Plaza de Mayo, denunció el fracaso de la conciliación y lanzó el más duro de sus ataques contra la oposición: por cada uno de los nuestros, afirmó, caerán cinco de ellos.

Fue el canto del cisne. Poco después, el 16 de septiembre, estalló en Córdoba una sublevación militar que encabezó el general Eduardo Lonardi, un prestigioso oficial, conspirador de 1951. Aunque los apoyos civiles fueron muchos, especialmente entre los grupos católicos, las unidades del Ejército que se plegaron fueron escasas. Pero entre las fuerzas "leales" había poca voluntad de combatir a los sublevados. A ellos se sumó la Marina en pleno, cuya flota amenazó con bombardear las ciudades costeras. Perón había perdido completamente la iniciativa y tampoco manifestó una voluntad de defenderse moviendo todos los recursos de que disponía; sus vacilaciones coincidieron con una decisión de quienes hasta ese momento habían sido sus sostenes en el Ejército, que sobriamente decidieron aceptar una renuncia dudosamente presentada. El 20 de septiembre de 1955 Perón se refugió en la embajada de Paraguay y el 23 de septiembre el general Lonardi se presentó en

Buenos Aires como presidente provisional de la Nación, ante una multitud tan numerosa como las reunidas por el régimen, pero sin duda distinta en su composición.